

Santiago, trece de marzo de dos mil veintitrés.

**Vistos:**

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio, por sentencia de cuatro de enero de dos mil de dos mil veintitrés, en los antecedentes RUC 2.200.041.997-8, RIT 273-2022, condenó a Pablo Andrés Carrasco Moreno, como autor del delito consumado de tráfico ilícito de drogas, cometido el día 3 de febrero de 2022 en la comuna de Cartagena, a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, accesorias legales, y a una multa de diez unidades tributarias mensuales. Asimismo, se le condenó como autor del delito consumado de tenencia ilegal de armas de fuego, sorprendido en la misma fecha y lugar, a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo y a las accesorias legales.

En contra de dicho fallo, la defensa del sentenciado dedujo recurso de nulidad, el cual se conoció en la audiencia pública de veintiuno de febrero pasado, oportunidad en la cual se incorporó la prueba ofrecida en el arbitrio y previamente aceptada por esta Corte, convocándose a los intervinientes a la comunicación de la sentencia para el día de hoy, como consta del acta respectiva.

**Considerando:**

**Primero:** Que, el recurso de nulidad se erige sobre la causal de invalidación prevista en el artículo 373, letra a) del Código Procesal Penal, toda vez que, en el desarrollo del procedimiento, como en el pronunciamiento de la sentencia, se han infringido garantías fundamentales aseguradas por la Carta Fundamental, en artículo 19, N° 3, inciso 6; N° 4; y, 19, N° 7, ya que en primer término, se efectuaron diligencias de investigación autónomas, sin que haya constado la autorización del Ministerio Público para su realización,



transgrediendo con ello el artículo 227 del Código Procesal Penal en relación con el artículo 181 del mismo cuerpo legal, afectando la garantía del artículo 19, N° 3 inciso sexto del texto político. De esta forma, el material probatorio obtenido en virtud de las diligencias de investigación, fue valorado por el tribunal de instancia para sustentar su decisión de condena.

Explica que, en la audiencia de control de detención, la defensa del imputado solicitó la ilegalidad de la detención, la que fue rechazada por el tribunal, declarándose legal. Luego, en la audiencia de preparación de juicio oral, consecuente con lo solicitado en la audiencia de control de detención, la defensa solicitó la exclusión de toda la prueba de cargo ofrecida por el ente persecutor, en función de la causal consagrada en el inciso tercero del artículo 276 del código adjetivo, rechazándose tal petición.

En primer lugar, denuncia la falta de registro de autorización para efectuar diligencias de investigación de carácter autónomas, especialmente de carácter intrusivas, transgresión del derecho a guardar silencio y a no generar prueba de cargo. Argumenta que, el procedimiento que condujo al descubrimiento de los hechos se enmarcó dentro de una orden de investigar emanada del Ministerio Público a la Policía de Investigaciones de Chile, con la finalidad de desarticular la actividad de tráfico de ilícito de drogas que se venía desarrollando en el borde costero y en la Plaza de Armas de Cartagena, según había dado cuenta el Departamento de Seguridad de dicho municipio, previa denuncia.

Afirma que, de la declaración de los funcionarios que precisa, resulta palmario que una de las primeras garantías que se vulneró fue el derecho a guardar silencio y no generar prueba de cargo. En efecto, si bien los funcionarios policiales actuaron inicialmente bajo instrucción de un fiscal del



Ministerio Público para la realización de diligencias de investigación, estas no culminaron con la detención del imputado por el delito de microtráfico, sino que, a consecuencia de antecedentes que recaban del propio imputado detenido, a quien proceden a interrogar, excedieron el ámbito de lo instruido, dado que no se encuentra autorizada como facultad autónoma por el legislador.

Además de haberse infraccionado el derecho recién anotado, a raíz de este interrogatorio a que fue sometido el imputado, se obtuvo una orden de entrada y registro por parte de un sujeto que se encontraba amparado por el artículo 302 del Código Procesal Penal, por tener la calidad de madre del imputado. Junto a lo anterior, todas las diligencias realizadas por los funcionarios públicos, después de la detención del imputado por el delito de microtráfico, se efectuaron de manera autónoma, no habiendo registro de alguna autorización para su realización por parte del Ministerio Público.

Junto con la práctica de diligencias autónomas con posterioridad a la detención del imputado, se infringió la obligación de registro, transgrediendo con ello el artículo 227, en relación con el art 181 todos del código instrumental, afectando la garantía del artículo 19, N° 3, inciso sexto de la Constitución Política de la República. Sostiene que no existió registro alguno, ya que no hubo autorización en cuanto a que se hubiese otorgado, por parte del ente persecutor a los funcionarios policiales, la autorización para practicar diligencias intrusivas y, estos solo dieron cuenta del resultado de estas diligencias una vez concluido el procedimiento, no siendo suficiente la existencia de una orden de investigar otorgada por el Ministerio Publico a la cual alude la sentencia recurrida. El razonamiento del tribunal en cuanto a que habría sido inevitable que se concediera la orden de entrada y registro, en nada altera la falta de registro, por lo que solicita anular el juicio oral y la



sentencia en su totalidad, indicándose que se excluye toda la prueba del Ministerio Público del auto de apertura de la autorización para la práctica de diligencias sin el conocimiento del órgano encargado de dirigir la investigación.

**Segundo:** Que, al inicio de la audiencia, el señor Defensor Penal Público incorporó la prueba de audio ofrecida en el recurso de nulidad y previamente aceptada por este Tribunal.

**Tercero:** Que en lo concerniente a los hechos que fundaron la acusación del Ministerio Público, la sentencia impugnada, en su motivo octavo, tuvo por acreditado que, *“...el día 3 de febrero de 2022, a las 15:20 horas aproximadamente, en Avenida Cartagena con Almirante Latorre en Cartagena, Pablo Andrés Carrasco Moreno vendió a personal de la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones de San Antonio, utilizando la técnica de agente revelador previamente autorizada por la Fiscalía Local de San Antonio, una bolsa de nylon transparente con 33 gramos netos de cannabis sativa.*

*Posteriormente, alrededor de las 15:30 horas, personal de la misma repartición, ingresó al domicilio de Carrasco Moreno, ubicado en Maratón N° 42, Cartagena; encontrando en una cómoda una bolsa con 99,4 gramos netos de cannabis sativa, dos bolsas de nylon con 1,88 gramos netos de cannabis sativa, dos envoltorios de papel metálico con 1,96 gramos netos de cannabis sativa, y una bolsa de nylon con 57,9 gramos netos de cannabis sativa.*

*Además, en el interior de su dormitorio, una escopeta Maverick calibre 12 serie MV53671E y 12 cartuchos de fuegos artificiales, todo ello sin autorización, y \$61.000 producto de la venta de droga”.*

Estos hechos fueron calificados por el tribunal como constitutivos del delito de tráfico ilícito de drogas previsto en el artículo 3° en relación al artículo 1°, ambos de la Ley 20.000; y, el delito de porte y tenencia ilegal de arma de



fuego y municiones, descrito y sancionado en el artículo 9º, en relación al artículo 2º, ambos de la Ley 17.798.

Ahora, en relación a los puntos abordados en el recurso de nulidad, el fallo señaló en la motivación duodécima que, *“...respecto de la solicitud de absolució n basada en la valoración negativa de los medios de pruebas obtenidos por el persecutor con posterioridad a la detención del acusado, por haber sido obtenidos con vulneración de garantías fundamentales; ésta se ha hecho consistir, en síntesis, en que en ejercicio de diligencias autónomas sin conocimiento del Ministerio Público, efectuadas por los funcionarios policiales, una vez que el acusado —de identidad y domicilio desconocido hasta entonces —, se encontraba detenido y sin haberle dado a conocer su derecho a guardar silencio, es interrogado respecto del hecho de tener más sustancias ilícitas en el domicilio, y que la madre del mismo accedió al registro voluntario del inmueble, sin que se le diera a conocer el derecho que le asiste a no inculpar a su descendiente, previsto en el artículo 302 del Código Procesal Penal; todo lo que conduce a la entrada de los agentes policiales al domicilio y el descubrimiento de la sustancias ilícitas y especies controladas por la Ley de armas.*

*En cuanto a esto último, cabe señalar que, de acuerdo a los antecedentes vertidos en audiencia por los testigos de cargo, el procedimiento que condujo al descubrimiento de los hechos de este juicio, se enmarcó dentro de una orden de investigar emanada del Ministerio Público a la Policía de Investigaciones de Chile, con fecha 13 de enero de 2022, con la finalidad de desarticular la actividad de tráfico de ilícito de drogas que se venía desarrollando en el borde costero y plaza de armas de Cartagena, según había*



*dado cuenta el departamento de seguridad de la Municipalidad, y previa denuncia.*

*En este contexto es que los funcionarios policiales solicitan autorización al ente persecutor para actuar mediante la figura del agente revelador, logrando concretar no solo una, sino dos transacciones en días sucesivos con el acusado, la segunda en mucha mayor cantidad y por mayor dinero que la primera, la que fue acordada en el encuentro del día anterior, oportunidad en que el acusado, además, ya había señalado tener más droga a su disposición para futuras entregas en mayores cantidades, precisando el testigo Rodrigo Guzmán Villegas —el agente revelador—, que le señaló expresamente tenerlas en su domicilio; todo lo cual no fue objeto de cuestionamiento por parte de la defensa.*

*Con estos antecedentes y no obstante que aún no se encontraba determinada la identidad del acusado, es dable concluir sin riesgo de error, que al momento de su detención, el curso de la investigación penal por delitos de la Ley de drogas ya estaba dirigida en su contra, y atendida la actividad desplegada por éste en ambas transacciones, las cantidades que vendió en cada una, e incluso la información que entregó en la primera de ellas, es posible entender que el hecho de haber confirmado el acusado, una vez que ya se encontraba detenido, que sí tenía más sustancias ilícitas en su domicilio, incluso de estimarse que aquello hubiese infringido su derecho a guardar silencio —cuyo tampoco es el caso—, en nada afecta el hallazgo de las sustancias y otras especies controladas por la ley de armas en su habitación, puesto que una vez determinada la identidad del sujeto, inevitablemente la investigación conducida por el Ministerio Público y ejecutada por la Policía de Investigaciones, terminaría en aquella diligencia y hallazgo, ya sea con o sin la*



*información entregada por el acusado o su madre, y en virtud de la autorización del encargado del domicilio o de orden judicial; razón por la cual también resulta irrelevante que la aquiescencia otorgada por la madre, tuviere o no algún presunto vicio de ilegalidad.*

*Sin perjuicio de ello, cabe señalar que en cuanto a la presunta realización de diligencias autónomas por parte de la policía sin autorización fiscal, aquello no es efectivo, en tanto que todas las actuaciones efectuadas por ésta, se encontraban amparadas por la orden de investigar previamente otorgada por el Ministerio Público con fecha 13 de enero de 2022, dentro de la que, entre otras cosas, se concedió la autorización de la figura del agente revelador, que permitió la detención del imputado en hipótesis de flagrancia, siempre dentro del marco y contexto de esa investigación en curso; estimando el tribunal que todas y cada una de las actuaciones efectuadas por la policía, se encuadran perfectamente en el marco previsto en el artículo 80 del Código Procesal Penal, y en el artículo 25 de la Ley N° 20.000, que regula la figura del agente revelador.*

*En el mismo sentido, en cuanto a la presunta vulneración del artículo 302 del Código Procesal Penal, en relación a la madre del acusado, cabe señalar que igualmente es parecer del tribunal, que de acuerdo al tenor de la norma y la ubicación de la misma dentro de dicho cuerpo legal, éste requisito sólo es procedente respecto de las personas que prestan declaración en calidad de testigos, a las que efectivamente se les debe advertir la facultad que le asiste de no prestar declaración incriminatoria en contra de las personas que allí se señala, cuyo no es el caso de la autorización prevista en el artículo 205 del Código Procesal Penal, que no reviste la característica descrita; y no habiéndose, de otra parte, allegado evidencia alguna en torno a que las*



*manifestaciones de voluntad y antecedentes hayan sido obtenidas del acusado o su madre, en base a un verdadero interrogatorio o mediante coacción, no es posible acoger la teoría planteada por la defensa”.*

**Cuarto:** Que, en lo concerniente a la infracción denunciada por el recurso de nulidad deducido por la defensa, cabe indicar que el debido proceso es un derecho asegurado por la Constitución Política de la República y que consiste en que toda decisión de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado y al efecto, el artículo 19, N° 3, inciso sexto, confiere al legislador la misión de definir las garantías de un procedimiento racional y justo. Sobre los presupuestos básicos que tal garantía supone, se ha dicho que el debido proceso lo constituyen a lo menos un conjunto de garantías que la Constitución Política de la República, los Tratados Internacionales ratificados por Chile que están en vigor y las leyes les entregan a las partes de la relación procesal, por medio de las cuales se procura que todos puedan hacer valer sus pretensiones en los tribunales, que sean escuchados, que puedan reclamar cuando no están conformes, que se respeten los procedimientos fijados en la ley y que las sentencias sean debidamente motivadas y fundadas.

**Quinto:** Que en relación a las normas de procedimiento aplicables al caso concreto, resulta necesario proceder a su análisis a efecto de poder determinar si ellas han sido transgredidas y, en su caso, examinar si dicho quebrantamiento ha significado la vulneración de los derechos fundamentales del acusado, como denunció su defensa.

**Sexto:** Que como se ha dicho en ocasiones anteriores por esta Corte, el Código Procesal Penal regula a lo largo de su normativa las funciones de la policía en relación con la investigación de hechos punibles y le entrega un





cierto nivel de autonomía para desarrollar actuaciones que tiendan al éxito de la investigación. Tal regulación, en todo caso, contempla como regla general que su actuación se encuentra sujeta a la dirección y responsabilidad de los representantes del Ministerio Público o de los jueces (entre otras, SCS N°s 7.178-2017, de 13 de abril de 2017; 9.167-2017, de 27 de abril de 2017; 20.286-2018, de 1 de octubre de 2018; 28.126-2018, de 13 de diciembre de 2018; y, 13.881-2019, de 25 de julio de 2019).

Es así como el artículo 83 del citado cuerpo normativo establece expresamente el marco regulatorio de la actuación policial sin orden previa o instrucción particular de los fiscales permitiendo su gestión autónoma para prestar auxilio a la víctima (letra a); practicar la detención en casos de flagrancia conforme a la ley (letra b); resguardar el sitio del suceso con el objeto de facilitar la intervención de personal experto de la policía, impedir la alteración o eliminación de rastros o vestigios del hecho, etcétera, (letra c); identificar testigos y consignar las declaraciones que ellos presten voluntariamente, tratándose de los casos de las letras b) y c) citadas (letra d); recibir las denuncias del público (letra e) y efectuar las demás actuaciones que dispusieren otros cuerpos legales (letra f). Solo en las condiciones que establece la letra c) recién citada, el legislador autoriza a los funcionarios de la Policía de Investigaciones y de Carabineros de Chile a efectuar diligencias autónomas de investigación.

A su vez, los artículos 85 y 86 del Código Procesal Penal, regulan el procedimiento de control de identidad, estableciendo la facultad de los funcionarios policiales para solicitar la identificación de cualquier persona sin orden previa de los fiscales, en los casos fundados en que estimen que exista algún indicio de que se hubiere cometido o intentado cometer un crimen,



simple delito o falta; de que se dispusiere a cometerlo; de que pudiese suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen, simple delito o falta; en el caso que la persona se encapuche o emboce para ocultar, dificultar o disimular su identidad; facultando para el registro de vestimentas, equipaje o vehículo de la persona cuya identidad se controla, procediendo a su detención, sin necesidad de orden judicial, de quienes se sorprenda a propósito del registro, en alguna de las hipótesis del artículo 130 —que describe lo que debe entenderse por situación de flagrancia— así como de quienes, al momento del cotejo, registren orden de aprehensión pendiente.

**Séptimo:** Que, a fin de dirimir lo planteado en el recurso, es menester estarse a lo asentado por los jueces de la instancia al ponderar las evidencias aportadas a la litis, sin que sea dable que, para tales efectos, esta Corte Suprema, con ocasión del estudio de la causal de nulidad propuesta, intente una nueva valoración de esas probanzas y fije hechos distintos a los determinados por el tribunal del grado, porque ello quebranta de manera evidente las máximas de oralidad, inmediación y bilateralidad de la audiencia que rigen la incorporación y valoración de la prueba en este sistema procesal penal, puesto que lo contrario implicaría que este tribunal de nulidad, únicamente de la lectura de los testimonios “extractados” en la sentencia, podría dar por acreditados hechos distintos y opuestos a los que los magistrados extrajeron de esas deposiciones, no obstante que estos últimos apreciaron íntegra y directamente su rendición, incluso el examen y contra examen de los contendientes, así como hicieron las consultas necesarias para aclarar sus dudas, lo que de aceptarse, simplemente transformaría a esta Corte, en lo atinente a los hechos en que se construye esta causal de nulidad, en un tribunal de segunda instancia, y todavía más, en uno que —a diferencia



del *a quo*— dirime los hechos en base a meras actas o registros —eso es sino el resumen de las deposiciones que hace el tribunal oral en su fallo—, lo cual, huelga explicar, resulta inaceptable. Aclarado lo anterior, se procederá al estudio de las protestas fundantes del recurso con arreglo a los hechos que en la decisión se tienen por demostrados.

**Octavo:** Que, resulta relevante para ello señalar que la sentencia impugnada consignó los presupuestos de hecho que se tuvieron como establecidos y sobre los cuales se hizo referencia en el razonamiento tercero de esta sentencia.

**Noveno:** Que, a través del recurso de nulidad se ha puesto en duda la procedencia de la entrada y registro del inmueble, discutiendo, en particular, tanto la plausibilidad de la flagrancia, al igual que la autorización entregada por la madre del imputado.

**Décimo:** Que, lo cierto es que la hipótesis del recurrente se estrella con los hechos fijados en el fallo recurrido ya que, de lo allí establecido, es claro que se trata de un caso de flagrancia, enmarcada en una transacción a través de la figura del agente revelador y dentro del contexto de una orden de investigar ordenada por el ente persecutor y, en cuyo caso, la autoridad policial se encontraba facultada para actuar sin necesidad de instrucción previa del Fiscal del Ministerio Público.

Lo anterior se concluye desde el momento en que el imputado, luego de su detención al vender el alcaloide al referido agente policial, incurrió en una conducta ilícita que se encuentra penada por la Ley 20.000 y, en ese contexto, los aprehensores podrían haber ajustado su conducta a lo que dispone el artículo 206 del Código Procesal Penal derivado de la propia información suministrada por el acusado, en cuanto a la presencia de droga en su domicilio,



lo que permitía inferir a los agentes policiales que, en ese lugar, existían más de las dosis que le fue hallada. Sin embargo, en el lugar, la madre del acusado autorizó la entrada al inmueble y su registro, no advirtiéndose la vulneración de garantías propugnada en el arbitrio, dado que la madre del imputado, hasta ese momento, solo aparecía ante los funcionarios policiales como la persona a cargo del domicilio, sin que existiesen indicios que pudiese ser testigo de los hechos investigados.

**Undécimo:** Que, en consecuencia, al proceder del modo que lo hicieron los funcionarios policiales, en ningún caso, transgredieron las facultades conferidas por el ordenamiento jurídico y, por lo tanto, no han vulnerado las normas legales que orientan el proceder policial como tampoco las garantías y derechos, que el artículo 19° de la Constitución Política reconoce y garantiza a los imputados, por lo que los jueces del fondo no incurrieron en vicio alguno al aceptar con carácter de lícita la prueba de cargo obtenida por la policía en la referidas circunstancias y que fuera aportada al juicio por el Ministerio Público, de manera que no queda sino rechazar la protesta presentada.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, a lo dispuesto en los artículos 373 y 384 del Código Procesal Penal, **se rechaza** el recurso de nulidad deducido por la defensa del acusado Pablo Andrés Carrasco Moreno, contra la sentencia de cuatro de enero de dos mil de dos mil veintitrés, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio y contra el juicio oral que le antecedió en el proceso RUC 2.200.041.997-8 y RIT 273-2022, los que en consecuencia, **no son nulos**.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Valderrama.

**Nº 3.737-2023.**



Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., los Ministros Suplentes Sr. Juan Manuel Muñoz P., Sra. María Loreto Gutiérrez A., y la Abogada Integrante Sra. Leonor Etcheberry C. No firma la Ministra Suplente Sra. Gutiérrez, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por haber concluido su período de suplencia.



En Santiago, a trece de marzo de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

